



Valledupar, Seis (06) de septiembre del año dos mil Veintidós (2022).

Referencia: ACCION DE TUTELA.
Accionante: WILLIAM DOMINGO COSTA
Accionado: BANCO CREDIFINANCIERA S.A.
Rad. 20001-41-89-002-2022-00568-00
Providencia: FALLO DE TUTELA

Procede el Juzgado a dictar el fallo correspondiente en la acción de tutela referenciada. En la cual se relacionan los siguientes:

I. HECHOS:¹

PRIMERO: El 21 de diciembre del 2020, el banco credifinanciera me aprobó un crédito de libranza por la suma de: OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$86.500.000), clasificado con el numero: 30000150706, y en virtud del mismo, procedieron al desembolso, quedando financiado para ser cancelado en un plazo de 144 meses por cuotas de \$1.703.010 que se me descontarían de mi mesada pensional, iniciándose esta operación desde el mes de FEBRERO DEL 2021 hasta mes de JULIO DEL 2022, ósea pague 18 cuotas de 1.703.010 cada una correspondiente a capital más intereses para un total de \$30.654.180. solicite una certificación de la deuda y me la entregaron por un valor a pagar de \$85.846.954. lo cual Sr. Juez me pareció injusto porque había pagado \$30.654.180 y me certifican \$85.846.954, dicha certificación me fue expedida con fecha límite de pago hasta el 3 de agosto del 2022. Procedí a la cancelación el día 2 de agosto del 2022 de dicho valor con un crédito bancario como se demuestra con copia del cheque de gerencia n° 3402 del Banco Popular girado al banco credifinanciera por el valor que me certificaron ósea \$85.846.954.

SEGUNDO: Me veo obligado a presentar esta acción de tutela para obtener el mencionado reconocimiento, toda vez que soy un hombre cabeza de familia, por lo cual con mi pensión sufragio los gastos de sostenimiento del hogar, por lo que me veo alcanzado y para adquirir un bien material, me ha tocado acudir a créditos, es así que cualquier dinero que pague de más, se ve afectado mi patrimonio y sostenimiento de mi familia.

TERCERO: En aras de que me respeten mis derechos y no sean vulnerados, me veo avocado a presentar acción de tutela, para que estos últimos sean tenidos en cuenta por la entidad banco credifinanciera; con sede en la ciudad de Valledupar – Cesar; y tomando esta actitud la accionada, estaría violando flagrantemente el derecho fundamental al debido proceso, a la defensa, a la contradicción, a la igualdad, a la dignidad, de nuestra carta política.

II. ACTUACIÓN PROCESAL:

El despacho al estudiar la demanda de tutela de referencia por venir en forma legal la demanda de tutela fue admitida mediante auto de fecha veintiséis (26) de agosto de Dos mil Veintidós (2022), notificándose a las partes sobre su admisión, y solicitando respuesta de los hechos presentados por el accionante a la parte accionada.

III. CONTESTACION DE LA ACCIONADA²

La parte accionada **BANCO CREDIFINANCIERA S.A.** contestó la presente acción de tutela de la siguiente manera:

La presente contestación la formulo dentro del término establecido para tal fin, una vez verificada la información que reposa en nuestros archivos y en atención con los hechos que motivan la acción de tutela nos permitimos precisar lo siguiente: Que con el legítimo propósito de evitar cualquier situación que implique cualquier tipo de vulneración a los derechos fundamentales del ACCIONANTE, la compañía a la cual represento procedió a dar respuesta de fondo al contenido de la petición, respuesta que fue remitida a la dirección de correo electrónico suministrada por el ACCIONANTE, como se soporta en la constancia de envío que se anexa a la presente. En los anteriores términos, damos respuesta a su requerimiento y de manera respetuosa nos permitimos solicitar que la misma sea denegada en razón a que mi representada atendió la solicitud del ACCIONANTE y ésta ya fue puesta en conocimiento de este, mediante envío realizado al apartado electrónico suministrado por este,

¹ Texto tomado taxativamente de la acción de tutela

² Tomado textualmente de la contestación de la entidad accionada



configurándose de esta manera un hecho superado y carencia actual del objeto respecto a los hechos que soportan la acción de tutela.

IV. PRETENSIONES:³

Que se ordene a la entidad crediticia banco credifinanciera, sucursal Valledupar – cesar, reconocer la reliquidación del saldo del referido crédito a corte del 03 de agosto del 2022, por lo tanto una vez se haga dicha reliquidación, proceder a reembolsar la diferencia que se produzca con respecto al pago de \$85.846.954 realizado mediante el referido cheque de manera inmediata y sin dilación para que dé una vez por todas se me solucione tal situación.

V. DERECHO FUNDAMENTAL TUTELADO:

El accionante considera que, con los anteriores hechos se está vulnerando su derecho fundamental al DERECHO DE PETICIÓN.

VI. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO:

La acción de tutela se ha dicho en reiteradas oportunidades está consagrada en el Art. 86 de la Constitución Política Nacional, como un instrumento jurídico al alcance de cualquier persona, con el cual puede obtener la protección específica e inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o violados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en aquellos casos autorizados por la ley.

6.1. REGULACION LEGAL DEL DERECHO DE PETICION.

El derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, es un derecho público subjetivo de la persona para acudir ante las autoridades, organizaciones privadas que establezca la ley, con miras a obtener pronta resolución a una solicitud o queja.

A diferencia de los términos y procedimientos jurisdiccionales, el derecho de petición es una vía expedita de acceso directo a las autoridades. Aunque su objeto no incluye el derecho a obtener una Resolución determinada, sí exige que exista un pronunciamiento oportuno.

Cuando se hace una petición a las entidades públicas o privadas y estas no la responden dentro del término legalmente establecido en la norma, es motivo para instar a la entidad a dar solución inmediata a la petición, a través de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de nuestra Carta Política, siendo esta un instrumento jurídico al alcance de cualquier persona, con la cual se puede obtener la protección específica e inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o violados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en aquellos casos autorizados por la Ley.

A si las cosas, tenemos que, de las circunstancias obrantes en el expediente, se puede colegir que el accionante pretende se tutele en su favor por violación al derecho de petición, regulado por el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, teniendo en cuenta que la accionada dio respuesta oportuna a su petición.

La Corte Constitucional ha establecido que el derecho de petición al igual que los demás derechos constitucionales no tienen “per se” el carácter de absolutos, pues cuentan con los límites previstos por los derechos de los demás y el orden jurídico.

Es un deber de todo ciudadano respetar los derechos de los demás y no abusar de los propios, son principios intrínsecos que van inmersos en el actuar de todos los ciudadanos colombianos, pero en especial de los funcionarios públicos.

En términos generales, puede decirse que el derecho de petición, se establece legal y constitucionalmente a favor de todas las personas. Cabe resaltar que, para la efectividad del mismo, quien hace uso de este medio, debe cumplir además de las exigencias establecidas en la norma que le da vida jurídica al mismo, la Constitución Política de Colombia, con los requisitos formales establecidos en la ley 1755 de 2015.

³ Tomado textualmente de la demanda



Por tanto, tenemos en primer lugar, como característica primordial que la petición debe ser respetuosa, puesto que si no lo fuere y se incumple con este requisito se exime de la obligación de responder a quien se invoca, por incumplimiento de las condiciones del artículo 23 de la Constitución Política.

En segundo lugar, el derecho de petición puede ser: por interés general, por interés particular, por petición de informaciones, o por consultas.

Cuando se trata de información, esta debe ser veraz e imparcial e inalterada, y puede ser general: acceso a documentos sobre el origen, estructura, funcionamiento, naturaleza, procedimientos etc. y particular: información que se produzca por el ejercicio de sus funciones o que repose en la entidad, exceptuándose el caso de los documentos sometidos a reserva por disposición de la ley o la Constitución Nacional.

Adicionalmente a lo anterior, tenemos que en los apartes de la norma citada se establece los términos en que deben resolverse las peticiones, las cuales serán atendidas de la siguiente manera:

“Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”

6.2. PROBLEMA JURÍDICO:

Corresponde al Juzgado determinar si la entidad accionada BANCO CREDIFINANCIERA S.A., ha vulnerado el derecho fundamental de petición del señor WILLIAM DOMINGO COSTA.

6.3. DEL CASO EN CONCRETO

Descendiendo a el sub exánime, observa este Despacho que el accionante manifiesta haber presentado solicitud a credifinanciera reconocer la reliquidación del saldo del referido del crédito a corte del 03 de agosto del 2022, por lo tanto, una vez se haga dicha reliquidación, proceder a reembolsar la diferencia que se produzca con respecto al pago de \$85.846.954, toda vez que se le estaría vulnerando sus derechos fundamentales al no reconocer el pago de la suma referida.

En consecuencia, le corrió traslado a la entidad accionada BANCO CREDIFINANCIERA S.A., quienes acreditaron en su contestación de tutela lo siguiente:



“Teniendo en cuenta lo anteriormente enunciado, es preciso aclarar que el crédito se liquidó y amortizó de acuerdo con los parámetros de financiación acordados entre las partes en el momento de la solicitud del referido crédito, por lo tanto, el valor certificado y pagado equivalente a Ochenta y Cinco Millones Cuarenta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro Pesos (\$85,846,954) es correcto y no es aplicable la reliquidación y/o ajustes en la obligación. No obstante lo anterior importante mencionar e informarle que posterior a la cancelación del crédito se generó un saldo a su favor por la suma de Un Millón Setecientos Tres Mil Diez Pesos (\$1,703,010) correspondiente a la cuota reportada en el mes de agosto, dicho valor podrá ser por usted reclamado a partir del 1 de septiembre de la presente anualidad en cualquier sucursal del Banco Bogotá S.A., presentado su cédula de ciudadanía original, es importante destacar que para el efecto cuenta con un plazo de veinte (20) días calendario para proceder con el retiro del dinero ante la entidad bancaria acá enunciada”

En ese sentido de las pruebas aportadas por la entidad accionada el despacho observa que se ha brindado una respuesta de fondo a lo solicitado por la accionante.

Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia C- 418 de 2017 reiteró que el ejercicio del derecho de petición se rige por las siguientes reglas y elementos de aplicación:

- “1) El de petición es un derecho fundamental y resulta determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.
- 2) Mediante el derecho de petición se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación política.
- 3) La respuesta debe satisfacer cuando menos tres requisitos básicos: (i) debe ser oportuna, es decir, debe ser dada dentro de los términos que establezca la ley; (ii) la respuesta debe resolver de fondo el asunto solicitado. Además de ello, debe ser clara, precisa y congruente con lo solicitado; y (iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario.**
- 4) La respuesta no implica necesariamente la aceptación de lo solicitado, ni se concreta necesariamente en una respuesta escrita. (...)”

Lo que demuestra que, la accionada dio respuesta a las peticiones solicitadas por la peticionaria y que dieron origen a la presente demanda de tutela, al dar una respuesta, clara, congruente y de fondo a lo solicitado por el peticionario, según los documentos anexado en la contestación de la presente acción constitucional.

Respecto a la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte Constitucional se pronunció en Sentencia T- 021 del 20 de febrero de 2017, con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, y ha señalado que esta se presenta en la acción de tutela cuando frente a la solicitud de amparo del actor, la orden del Juez de tutela carece de efectos, precisando que la misma acontece cuando se está ante un daño consumado o ante un hecho superado.

En esa sentencia textualmente dijo el máximo tribunal constitucional:

“La jurisprudencia de esta Corporación, en reiteradas oportunidades, ha señalado que la carencia actual de objeto sobreviene cuando frente a la petición de amparo la orden del juez de tutela no tendría efecto alguno o caería en el vacío Al respecto se ha establecido que esta figura procesal, por regla general, se presenta en aquellos casos en que tiene lugar un daño consumado o un hecho superado.

En cuanto al daño consumado, la jurisprudencia ha admitido que el mismo tiene ocurrencia cuando la amenaza o la transgresión del derecho fundamental ya ha generado el perjuicio que se pretendía evitar con el mecanismo preferente de la tutela, de manera que resulta inocuo para el juez impartir una orden en cualquier sentido. Así las cosas, el daño consumado supone que no es posible hacer cesar la violación o impedir que se concrete un peligro y, por ello, tan sólo es procedente el resarcimiento del daño originado por la violación del derecho.



En este escenario, esto es, con el fin de obtener una reparación económica, entiende la Corte que la acción de tutela resulta—por regla general— improcedente, pues su naturaleza es eminentemente preventiva y no indemnizatoria. De manera que, en relación con este fenómeno, los jueces de instancia y la propia Corte deben declarar la improcedencia de la acción, a menos que —bajo ciertas circunstancias— se imponga la necesidad de pronunciarse de fondo por la proyección que pueda tener un asunto, en virtud de lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, o por la necesidad de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en la misma situación o que requieran de especial protección constitucional.

Por su parte, el hecho superado tiene ocurrencia cuando lo pretendido a través de la acción de tutela se satisface y desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados por el demandante, de suerte que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso específico resultaría a todas luces inocua y, por lo tanto, contraria al objetivo de protección previsto para el amparo constitucional.

En este supuesto, no es perentorio incluir en el fallo un análisis sobre la vulneración de los derechos cuya protección se demanda, salvo “si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, [ya sea] para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera. De otro lado, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo. Esto es, que se demuestre el hecho superado”.

Precisamente, en la Sentencia T-045 de 2008, se establecieron los siguientes criterios para determinar si en un caso concreto se está o no en presencia de uno de tales hechos, a saber:

“1. Que con anterioridad a la interposición de la acción exista un hecho o se carezca de una determinada prestación que viole o amenace violar un derecho fundamental del accionante o de aquél en cuyo favor se actúa.

2. Que durante el trámite de la acción de tutela el hecho que dio origen a la acción que generó la vulneración o amenaza haya cesado.

3. Si lo que se pretende por medio de la acción de tutela es el suministro de una prestación y, dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado.”

Vistas las anteriores consideraciones, es evidente que en el asunto en estudio se presenta la carencia actual de objeto por hecho superado, ya que la entidad accionada, atendió de forma adecuada la solicitud efectuada por el accionante, de ahí que la acción de tutela pierda su razón de ser en este caso concreto, pues la orden que pudiera impartir el juez de tutela no tendría ningún efecto práctico al haberse superado la situación de hecho que produjo que la tutelante, incoara el resguardo constitucional, es decir, el motivo que generó la acción ya desapareció. Por lo tanto, se negará la presente acción por ser un hecho superado.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Segundo De Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Valledupar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR, la presente acción de tutela instaurada por **WILLIAM DOMINGO COSTA**, contra **BANCO CREDIFINANCIERA S.A.**, por tratarse de un **HECHO SUPERADO**.

SEGUNDO: Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama).



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
JUZGADO 2° DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES
EDIFICIO SAGRADO CORAZÓN, PISO 3 VALLEDUPAR – CESAR
Correo Electrónico: j02cmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: 605-5801739



TERCERO: En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

El Juez,


JOSSUE ABDON SIERRA GARCÉS
JUEZ



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
JUZGADO 2° DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES
EDIFICIO SAGRADO CORAZON, PISO 3 VALLEDUPAR – CESAR
Correo Electrónico: j02cmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: 605-5801739



Valledupar, Seis (06) de septiembre del año dos mil Veintidós (2022).

Oficio No. 2942

Señor(a):
WILLIAM DOMINGO COSTA
Correo electrónico:

Referencia: ACCION DE TUTELA.
Accionante: WILLIAM DOMINGO COSTA
Accionado: BANCO CREDIFINANCIERA S.A.
Rad. 20001-41-89-002-2022-00568-00
Providencia: FALLO DE TUTELA

NOTIFICAR FALLO DE TUTELA DE FECHA SEIS (06) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) QUE EN PARTE RESOLUTIVA DICE: **PRIMERO: NEGAR**, la presente acción de tutela instaurada por **WILLIAM DOMINGO COSTA**, contra **BANCO CREDIFINANCIERA S.A.**, por tratarse de un **HECHO SUPERADO**. **SEGUNDO:** Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama). **TERCERO:** En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. El Juez. *fd.* **JOSSUE ABDON SIERRA GARCES**.

Atentamente,


ESTEFANIA VILLAMIZAR LARRAZABAL
Secretaria



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA
JUZGADO 2° DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIAS MÚLTIPLES
EDIFICIO SAGRADO CORAZON, PISO 3 VALLEDUPAR – CESAR
Correo Electrónico: j02cmvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono: 605-5801739



Valledupar, Seis (06) de septiembre del año dos mil Veintidós (2022).

Oficio No. 2943

Señor(a):
BANCO CREDIFINANCIERA S.A.
Correo electrónico:

Referencia: ACCION DE TUTELA.
Accionante: WILLIAM DOMINGO COSTA
Accionado: BANCO CREDIFINANCIERA S.A.
Rad. 20001-41-89-002-2022-00568-00
Providencia: FALLO DE TUTELA

NOTIFICAR FALLO DE TUTELA DE FECHA SEIS (06) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) QUE EN PARTE RESOLUTIVA DICE: **PRIMERO: NEGAR**, la presente acción de tutela instaurada por **WILLIAM DOMINGO COSTA**, contra **BANCO CREDIFINANCIERA S.A.**, por tratarse de un **HECHO SUPERADO**. **SEGUNDO:** Notifíquese este fallo por secretaria, o por el medio más eficaz (oficio o telegrama). **TERCERO:** En caso de ser impugnado el presente fallo, envíese por secretaria a la oficina judicial para que se surta el reparto correspondiente, en caso de no serlo, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. El Juez. *fd.* **JOSSUE ABDON SIERRA GARCES**.

Atentamente,



ESTEFANIA VILLAMIZAR LARRAZABAL
Secretaria